

—al igual que los políticos— de conocimientos para ello. Y que no pueden dejar de aprovechar la oportunidad de vender algún ejemplar más o robarle audiencia a la competencia, quizá haciendo un poco más de ruido.

El resultado es que el principio precautorio —ponerse en lo peor para obtener la máxima seguridad— es practicado sistemáticamente, no tanto por las administraciones como por el propio consumidor. Ante la duda, abstenerse. Como bien sabemos, donde no hay información hay rumores, y basta un rumor para que la población se abstenga. Si puede, claro está.

Los fenómenos asociados a la sociedad de riesgo responden así a tres determinantes que, no por casualidad, son las tres variables que ha identificado la ciencia moderna del análisis de riesgo: conocimiento, gestión e información. Para comenzar, la ignorancia y el desconocimiento sobre los efectos últimos de tecnologías o actos; sabemos poco (y ciertamente menos de lo necesario) sobre la complejidad sociotécnica que nos envuelve.

En segundo lugar, hay un notable déficit de gobernabilidad, una mala gestión de eventos para los que los sistemas de aseguramiento, prevención e intervención clásicos no están preparados. Y sobre todo ello, la creciente desconfianza de los ciudadanos causada por la insuficiente y caótica información. Pero no son problemas insolubles; no son maldiciones. Requieren los instrumentos que siempre hemos utilizado como sistemas de aseguramiento: mayor conocimiento, capacidad de gestión y buena información. De momento, como estamos comprobando no disponemos de ninguno de los tres.

Y así, acabamos de terminar la modernización de España, la clásica, y

cuando aún estamos celebrando (sin parar, por cierto) el jolgorio de haber llegado, henos aquí que nos topamos de frente, no ya con los viejos problemas de la modernidad ausente que han plagado la historia reciente de España (donde no había democracia, burguesía, ciencia, empresariado y tantas otras cosas) sino con los de la posmodernidad bien presente. Bienvenidos sean si con ellos recuperamos el nervio, dejamos de celebrar el pasado y comenzamos a mirar el futuro. Pues esto, la falibilidad, la ignorancia, el descontrol, la desconfianza, también es Europa. Mal de muchos, epidemia, ciertamente. Pero también: mal de muchos, consuelo de tontos.

■ Unión Europea

De Niza a Göteborg

La UE en manos nórdicas

Esther Barbé y Elisabeth Johansson

Como dice el refrán, “una imagen vale más que mil palabras”. En materia de Unión Europea (UE), esa imagen es la que ofreció el primer ministro sueco y presidente de turno de la UE durante el primer semestre de 2001, el socialdemócrata Goran Persson, quien a principios de enero afirmó ante la prensa que no tenía constancia de que los Quince hubieran decidido en Niza que los Consejos Europeos se celebraran, en el futuro, exclusivamente en Bruselas.

Las palabras de Persson coincidían con las pronunciadas días antes por el primer ministro finlandés, Paavo Lipponen, cuando apuntó ante medios de su país que en Niza no se había tomado ninguna decisión en lo relativo a la ubicación de los Consejos Europeos, hasta ahora organizados por la presidencia de turno (la sueca organiza un Consejo especial sobre asuntos socioeconómicos en Estocolmo, en marzo, y el ordinario en Göteborg, en junio).

La interpretación que la opinión pública de Suecia o de Finlandia extrajo de la falta de conocimiento de sus representantes en Niza del acuerdo adoptado en torno a la “bruselización” del Consejo Europeo fue muy negativa. Por un lado, la exigencia de claridad y transparencia en los asuntos europeos por parte de las sociedades nórdicas —cuestión sensible desde el primer referéndum danés sobre el tratado de Maastricht— chocaba de pleno con la manera de actuar de la presidencia francesa. Esto es, la imagen de mercadeo que ofreció Jacques Chirac al proponer, sin consulta alguna y en el último minuto, esa “bruselización” del Consejo Europeo a los belgas a cambio de su visto bueno al tratado de Niza. Por otro lado, la centralización del Consejo en Bruselas chocó con la aprensión existente en los países del Norte en relación con la “capital de Europa”.

Las críticas a la burocracia de Bruselas se han multiplicado y cada

Esther Barbé es catedrática de Relaciones Internacionales y directora del Instituto Universitario de Estudios Europeos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Elisabeth Johansson, licenciada por la Universidad de San Diego (Estados Unidos), es investigadora en el mismo Instituto.

vez se oyen más voces favorables a la descentralización de la construcción europea. Así pues, transparencia y descentralización son algunos de los términos que mejor describen la tendencia del mundo nórdico en cuanto al proceso comunitario. La reflexión que merecen los resultados de Niza, unida a la presidencia sueca de la UE durante los seis primeros meses de este año, forman el contexto para preguntarse por el factor nórdico en la integración europea. ¿Qué les caracteriza en ese terreno? ¿Cuál ha sido, es y será su influencia en el proceso de integración?

Toda generalización es abusiva. Aun así, es posible identificar unas características compartidas, en mayor o menor medida, por los tres países nórdicos de la UE.

En primer lugar, se incorporaron tardíamente y, a diferencia del caso español, lo hicieron por voluntad propia. En otras palabras, desde sus orígenes mostraron reticencia hacia el proceso de integración europea y toda idea de supranacionalidad. Lo que nos permite recordar que, desde los años cuarenta, se alinearon junto a Reino Unido en los primeros pasos de la construcción europea (Congreso de La Haya, 1948; Consejo de Europa, 1949). Lo dicho se aplica también a Dinamarca, a pesar de que su ingreso en la Comunidad Europea data de los años setenta. Sólo el cambio de contexto internacional y el sentimiento de crisis interna (caso sueco) explican el rápido ingreso de Suecia y Finlandia en la UE.

En segundo lugar, se trata de países-frontera, especialmente los dos anteriores. Ambos conforman límites exteriores de la UE, y no poco importantes, como el de Rusia (físico en el caso de Finlandia).

En tercer lugar, son países que han marcado a través de su actitud política una clara diferenciación entre el centro y la periferia en el marco de la Unión, con una decidida voluntad de independencia. El caso danés es el más elocuente en este sentido. Se ha dicho que los "noes" de Dinamarca en sucesivos referendos (Maastricht, euro) se explican por el temor de sus ciudadanos a estar muy cerca del centro. Finlandia, por su parte, es el país nórdico que menos responde a este modelo; el que mayor disponibilidad presenta a formar parte del núcleo de la Unión.

Finalmente, son naciones activistas en el terreno internacional. Ése es el caso de su política en las Naciones Unidas. Como ejemplo, se puede recordar que, mientras Suecia se ponía al frente de la UE a principios de año, los otros países nórdicos se prodigaban en la ONU; así, Finlandia ejercía la presidencia de la Asamblea General; Dinamarca lideraba el diálogo sobre la financiación para el desarrollo y, aunque no forma parte de la Unión; Noruega ocupaba un puesto en el Consejo de Seguridad; Islandia, por su parte, presidía el grupo para la reforma de dicho Consejo. Esta dimensión "onusiiana" que ha calado en la cultura internacional de los países nórdicos tiene claro reflejo en su postura frente a las dimensiones de seguridad y de defensa de la Unión.

Si nos preguntamos por la influencia de estas naciones en el proceso de integración europea, hay que empezar apuntando que la misma se concentra, en una primera fase, en las negativas danesas a aceptar la profundización emprendida por la UE tras el fin de la guerra fría. Con el "no" a Maastricht, la discreta Dinamarca fue la responsable del comienzo de una nueva etapa en la

vida comunitaria: la de la autocrítica y, con ella, la aceptación de la Europa de geometría variable y, aunque ingresó finalmente en la UE, se quedó al margen de la moneda única, de la política de defensa, de la cooperación judicial y de la ciudadanía europea.

Todo ello chocaba con la tendencia dominante en España en la primera mitad de los años noventa, que, por principio, defendía la bondad de la integración europea y rechazaba la flexibilidad de la geometría variable. De ahí que España fuera uno de los países que más trabas puso, en su momento, a la ampliación a Suecia, Finlandia, Noruega y Austria. Más allá de intereses concretos (participación de España en la política pesquera con vistas a la integración noruega), Madrid manifestó claramente su desacuerdo con las excepciones y diferencias de los recién llegados (neutralidad, por ejemplo).

La influencia de los nórdicos se ha dejado notar en la Europa de los Quince a la hora de redefinir el modelo: las negociaciones, primero, para el tratado de Amsterdam y, después, para el de Niza. En dos cuestiones quedó clara la impronta nórdica en el caso de Amsterdam: transparencia y, por paradójico que pueda parecer, en política de defensa.

En lo que respecta a Niza, su influencia se manifestó, sobre todo, en la creación de un modelo de construcción europea que algunos resumen en "subirse al carro británico". Esto último se refiere, en especial, a Suecia que, según algunos comentaristas, está despertando tras unos primeros años de adormecimiento o de benignidad dentro de la UE. Todo ello ha coincidido con la preparación de su presidencia al frente de los Quince.

Ésta como cualquier otra, ha comenzado con una definición de sus prioridades en la agenda europea. Así, durante este semestre sueco se la conoce como la agenda de las tres "E" (en inglés): ampliación (*enlargement*), empleo (*employment*) y medio ambiente (*environment*). El último asunto no tiene por qué extrañarnos. Fueron los nórdicos los que ya en los años setenta colocaron las cuestiones medioambientales entre las prioridades de las políticas nacionales. De ahí que Suecia haya mostrado su voluntad de convertir el Consejo Europeo de Göteborg en la cumbre del medio ambiente, ya que constituye, sin duda, un terreno en el que el peso de estos países en la UE es decisivo. Lo que, sin embargo, hace prever que la presidencia sueca no consiga compromisos de gran calado entre los Quince; especialmente cuando dichos acuerdos, para ser efectivos, deberían ir acompañados de recursos financieros. Algunos países de la Unión, entre ellos España, ya se encargarán de "moderar" el entusiasmo nórdico en medio ambiente.

Por lo que se refiere al empleo, más allá de la materia en sí, a la que se dedica en buena medida el Consejo Europeo de Estocolmo, lo destacable es que el tratamiento dado a esta cuestión por parte de los Quince en los últimos meses es el mejor ejemplo de la reformulación que, desde el mundo nórdico y especialmente desde Suecia, se hace del modelo de integración europea. En cuanto a la creación de una política europea de empleo, los países comunitarios han dejado de lado los métodos de integración supranacional para optar por la cooperación. Así, la UE fija las directrices a seguir y los Estados son responsables de decidir cuándo y cómo llevarlas a cabo, incluyendo la financia-

ción. El programa sueco apuesta por desarrollar la UE en el futuro a partir de mecanismos de cooperación, que irían ganando terreno frente al método de la integración supranacional que subyace en la construcción comunitaria. De hecho, los nórdicos presentan como argumento a su favor los resultados positivos conseguidos a lo largo de varias décadas en el Consejo Nórdico que, siempre sobre la base de la cooperación, creó un marco común, entre otras cosas, para el mercado de trabajo o para los derechos sociales.

Algunas voces se han alzado en contra de un proceso, como el propuesto por la presidencia sueca, que requeriría una dosis importante de renacionalización de la vida comunitaria. Muchas de esas voces se localizan en la Europa del Sur. Frente a ellas, los argumentos de la presidencia sueca se centran en defender la necesidad de una Europa más abierta y moderna, capaz de hacer frente de manera eficiente a la ampliación. El pensamiento ofrecido desde el Norte choca, sin duda, con el discurso acuñado en nuestro país, hasta ahora muy favorable a la comunitarización y a todo lo que ella supone (instituciones, presupuestos). Es evidente que la próxima ampliación traerá consigo un cambio de rumbo significativo para todos, especialmente si, como parece, no hay que pensar en aumentos sustanciales del presupuesto comunitario.

Sobre la tercera cuestión, la ampliación, coincide todo el mundo nórdico, que ve en la apertura a Europa central y oriental una prioridad absoluta para sus agendas. La acción de los gobiernos en ese sentido coincide con la opinión pública de sus países. El Eurobarómetro (octubre de 2000) muestra que los suecos encabezan la

actitud positiva de las sociedades europeas de cara a la ampliación a los trece países candidatos, con un 61 por cien de opiniones favorables, seguidos por los daneses (58 por cien), frente a una media europea del 38 por cien (el 48 por cien de los finlandeses son favorables a la ampliación y se sitúan justo por debajo de los españoles, con un apoyo del 49 por cien).

La prioridad otorgada a la ampliación sirvió a Lipponen para explicar que su país no actuó con firmeza en Niza junto a otros pequeños y medianos, como Portugal o Bélgica, para conseguir mayor número de votos en el Consejo, ya que dicha posición ponía en peligro el éxito del tratado de Niza y, con él, la ampliación. Una vez superada la prueba de Niza, la presidencia sueca ha puesto en marcha su programa de actuación para avanzar en la entrada de los países de Europa central y oriental.

Gunter Verheugen, comisario responsable de la ampliación, ha calificado el programa sueco de "tren de alta velocidad" y, si bien tachó a los suecos de poco realistas antes de asumir la presidencia, su actitud ha cambiado notablemente y, a mediados de enero ya hablaba del realismo de Suecia al proponerse dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de ampliación. El resultado previsible de todo ello es que durante este semestre algunos países tendrán todos los capítulos negociadores abiertos, a la vez que, en algunos casos, se entrará en la recta final para cuestiones sensibles, como las cuatro libertades, la política social o el medio ambiente. Suecia tiene en sus manos la maquinaria para dar un acelerón, que Persson ha definido como responsabilidad histórica, a la vez que una manera de evitar la inestabilidad

en los países vecinos y de mejorar el futuro de la Unión. En este sentido, Suecia subraya el impacto positivo que la ampliación tendrá para la UE en materia de mercado único, de medio ambiente y de posición en el mundo.

Como se sabe, el proceso de integración europea ya tiene otra cita en el horizonte: una nueva reforma del tratado que debería negociarse a partir de 2004. Ésa fue una de las condiciones para que Niza saliera adelante. Hay que asumir, por tanto, que existen países insatisfechos con la actual UE y, entre ellos, se encuentran los nórdicos. Los sondeos de opinión mostraban los perfiles de descontento (Eurobarómetro, octubre 2000). La sociedad sueca es la más crítica (el 38 por cien piensa que la pertenencia a la UE es mala para su país, frente a un cinco por cien en España).

Los finlandeses, por su parte, están muy por debajo de la media comunitaria, ya que un cuarenta por cien cree que es buena, frente a un veintidós por cien que la considera mala (la media de los Quince es de un 49 por cien frente a un catorce por cien). Y, por último, los daneses son una sociedad polarizada y muy concienciada sobre el asunto (un 53 por cien la considera buena frente a un veinticuatro por cien que opina que es mala). En este caso hay que recordar que la construcción europea se ha convertido en un asunto interno de primer orden. Tanto es así que, durante las negociaciones para el tratado de Niza, los representantes daneses temían la reforma de la Comisión, con la pérdida de su comisario, porque ello podría conducir, dada la alta sensibilidad en el país, a un nuevo referéndum.

En suma, la sensación negativa respecto de la pertenencia a la UE va

en aumento en los tres países nórdicos; Suecia y Finlandia forman parte del grupo de sociedades europeas, como la británica o la alemana, que mayoritariamente creen no beneficiarse de su pertenencia a la Unión. De ahí que todo haga pensar que dichos países ven en la cita de 2004 la ocasión para redefinir el modelo europeo a partir de sus preferencias.

Asimismo, de cara a un futuro próximo, dos asuntos ocupan nuestro interés en lo que respecta a la actitud nórdica en materia europea. De una parte, su inserción en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común (PESC) y, muy especialmente, en su dimensión de política común de seguridad y defensa (PCSD). De otra parte, el modelo político institucional que determinará la actitud nórdica en 2004.

En materia de PESC, los socios nórdicos y, sobre todo, los recién llegados Suecia y Finlandia, tienen un claro perfil de países periféricos y jóvenes en la UE, más preocupados por la inestabilidad en los vecinos (Europa central, Estados bálticos, Rusia) que por los debates internos en la Unión. Lo que se traduce, primero, en su prioridad absoluta por la entrada de nuevos miembros y, en la misma línea, en difuminar la lógica *in-out* a la hora de actuar en el marco internacional ("la UE no ha de ser una fortaleza") y, segundo, en tratar de convertir a la Unión en un elemento más dentro de espacios amplios ("la UE no es Europa").

La política para la región del mar Báltico (dimensión septentrional de la UE), activada durante la presidencia finlandesa (segundo semestre de 1999), es el mejor ejemplo del estilo nórdico por lo que se refiere a la PESC: marcos de cooperación transfronteriza a través de decisiones por

consulta entre las partes y haciendo de la UE una organización más, en un espacio "multi-organizacional".

Entre otras, éstas son algunas de las características que diferencian la dimensión nórdica de la UE de la mediterránea. En términos de agenda, los nórdicos han hecho uso de su influencia, como era de esperar, para que la Unión dedique más atención a sus asuntos prioritarios, bien sean localizados (Kaliningrado) o con trascendencia europea, a partir de su localización en el Báltico (medio ambiente, crimen organizado). De hecho, la presidencia sueca reaccionó de manera crítica frente al informe de Javier Solana, conocido a finales de enero a través de filtraciones danesas, en el que el *Señor PESC* se muestra contrario a la práctica de que cada presidencia establezca sus prioridades en política exterior. Al contrario, aunque desde Suecia se reivindica más coordinación en esa materia, los nórdicos fieles a sus posturas descentralizadoras no verían con buenos ojos que ese privilegio desapareciera.

Su inserción en la política de defensa europea es un asunto sensible. De entrada, Dinamarca sigue al margen de dicha política (exención conseguida como condición para organizar un segundo referéndum sobre el tratado de Maastricht). La consulta popular de 1993 sigue marcando la política danesa en ese sentido, si bien el contexto ha cambiado de forma radical. Ello explica que el ministro de Asuntos Exteriores danés, Niels Helveg Petersen, dimitiese poco después del Consejo de Niza, disconforme con la actitud de su gobierno de no participar en la creación de la fuerza de intervención rápida aprobada por los Quince. La excepcionalidad danesa —el único país comuni-

tario que no aportará fuerzas— se verá relativizada con su compromiso de aportar tropas a una "fuerza nórdica". Lo que lleva a apuntar que tanto Suecia como Finlandia han sido desde el momento de su ingreso en la UE muy activas en la materia, por contradictorio que pueda parecer, ya que se trata de dos países neutrales que han expresado su voluntad de seguir siéndolo.

En efecto, Finlandia y Suecia han sido activas, tanto es así que su doctrina en el asunto se ha convertido en la doctrina comunitaria. Esto es, dichos países presionaron en las negociaciones del tratado de Amsterdam para que se incluyeran, de modo preciso, las funciones de la política de defensa de la UE: funciones de gestión de crisis. El desarrollo a lo largo del último año, gracias al desbloqueo británico sobre esa cuestión, ha llevado justamente en esa dirección: la UE se está dotando de fuerzas propias (Finlandia proporcionará 2.000 soldados y Suecia 1.600).

En suma, los nórdicos han sido los que con claridad han trazado la línea entre gestión de crisis y defensa y, de momento, la UE se ha quedado de su lado: misiones humanitarias, prevención de conflictos y gestión de crisis. Si a ello añadimos que el tratado de Niza no contempla la posibilidad de cooperación reforzada en materia de defensa —posición de Suecia durante las negociaciones, frente a las propuestas españolas en sentido contrario— aparece un cuadro en el que los nórdicos se sienten cómodos, al menos los recién llegados (el caso danés merece renglón aparte), y con la sensación de haber influido en la forma que tomará la PCSD.

Finalmente, hay que incidir en el modelo político-institucional que para la UE se desea entre los socios nórdi-

cos. La reciente experiencia de Niza sirve para entrar en materia. Cuatro asuntos llaman la atención: la imagen de la Comisión Europea, el voto por mayoría en el Consejo de Ministros, la integración flexible y la Carta de Derechos Fundamentales.

En relación con la Comisión, hay que apuntar que la percepción en las sociedades nórdicas es negativa. Tanto es así que la opinión pública de los tres países no la cita cuando se le pregunta por las tres instituciones o agencias que le merecen más confianza (se mencionan el Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo, seguidos del Banco Central Europeo y del Defensor del Pueblo). Este perfil no concuerda en absoluto con el español o con el de otros países del Sur, que sí confían en la Comisión. Si bien Dinamarca o Finlandia no han llegado a proponer, como en el caso del primer ministro sueco, la conversión de la Comisión en un secretariado intergubernamental o a hablar de su desaparición, sí existe una opinión generalizada de burocratización excesiva, de falta de democracia y de escasa eficiencia.

Todo ello ha llevado a la presidencia sueca a establecer en su programa una reforma de los métodos de trabajo y de la cultura administrativa de la Comisión y del Consejo. En otro orden de cosas, hay que apuntar que los nórdicos se mostraron contrarios en Niza a cualquier reforma de la Comisión (disminución del número de comisarios) que no afectara por igual a grandes y pequeños, temerosos de encontrarse con un colegio opaco controlado por los primeros.

La reclamación de eficacia también lleva a los gobiernos nórdicos a tener una actitud favorable a la extensión del voto por mayoría cualificada en el

Consejo, ante el temor de una parálisis cada vez más probable (ampliación) si se mantiene la unanimidad. Ello no obstó para que Suecia, por ejemplo, defendiera continuar con la unanimidad, en favor de su "modelo sueco" de bienestar social, en el terreno fiscal (en el que por unas u otras razones están de acuerdo muchos países).

La actitud de los gobiernos coincide con la de sus ciudadanos, que se sitúan entre los más favorables en relación con el voto por mayoría en una futura Unión ampliada (59 por cien en Finlandia, 58 por cien en Dinamarca y 53 por cien en Suecia, frente a una media europea del 45 por cien, situándose España por debajo de la media, el cuarenta por cien). Sobre esta cuestión se han publicado artículos muy críticos en la prensa finlandesa sobre el egoísmo que demuestran algunos países que apoyan la unanimidad en asuntos que afectan al futuro (ampliación). La posición española durante el Consejo de Niza, en relación con el mantenimiento de la unanimidad sobre fondos estructurales y el de cohesión, fue especialmente criticada.

De nuevo, los argumentos de eficacia y eficiencia justifican las reclamaciones realizadas desde los países del Norte a favor de la integración flexible dentro de la UE. Esa noción lleva a objetivos diversos: la voluntad sueca de flexibilizar la maquinaria mediante la introducción de la cooperación en un número de materias cada vez mayor, que ya se ha mencionado en estas páginas, y, con ello, renacionalizar parte de la vida comunitaria; la voluntad de todos los nórdicos de ir hacia una clara delimitación de competencias entre la UE y los Estados; o el temor expresado por todos ellos hacia la cooperación reforzada, si esto pudiera

suponer lesiones para sus intereses (la negativa sueca a aceptar la cooperación reforzada en el campo de la defensa se explica por su temor a quedar al margen de la reorganización de la industria de armamento europea y lesionar así sus importantes intereses en ese sector) o, simplemente, la percepción negativa de quedar fuera, caso de los finlandeses. Esto último asemeja la actitud finlandesa a la española.

La Carta de Derechos Fundamentales es el último de los asuntos apuntados. Los tres países nórdicos defienden la idea de mantener la Carta, tal y como se adoptó en Niza, como un texto político sin fuerza jurídica. En defensa de su posición, dichos países aducen la existencia de protección suficiente en el marco nacional y el peligro de conflicto de competencias entre la UE y los Estados. La Carta lleva aparejado el debate sobre la elaboración de una Constitución europea (posición defendida por el Parlamento Europeo en resolución adoptada poco antes de Niza).

En esta cuestión, la posición nórdica es, si atendemos a lo anterior, clara en el sentido de no avanzar en dicho terreno y de no entrar, por consiguiente, en discusiones como la relativa a la creación de un marco federal. Al contrario, desde el mundo nórdico, las exigencias se dirigen hoy a simplificar los textos existentes y hacerlos más comprensibles para los ciudadanos, insistiendo en que la próxima reforma del tratado ha de servir para favorecer la creación de Europa desde la base (*bottom-up*) y no como se ha venido haciendo tradicionalmente por parte de las elites (*up-down*) y con escasa transparencia.

En resumen, la agenda de las reformas de 2004 promete abordar cuestiones vitales para el futuro de la UE

en clave nórdica. Entre ellas hay que destacar la delimitación de competencias entre la Unión y los Estados (proceso no deseado en el caso del gobierno español, ya que supondría la delimitación de competencias entre UE, Estado y autonomías), una mejor separación de poderes entre las instituciones europeas (proceso que puede abrir la caja de Pandora sobre el papel de la Comisión) y la simplificación de los tratados para hacerlos más claros y legibles. Así pues, transparencia, descentralización y mayor flexibilidad en la integración europea son orientaciones que chocan con el modelo arraigado en España.

Sin embargo, hay que apuntar que las diferencias entre el sistema nórdico y el dominante en nuestro país no son tan fuertes como a principios de los años noventa. De hecho, el modelo español está en proceso de cambio, puesto que España, al igual que sus socios europeos, se está acostumbrando a vivir ajustándose a la creciente diversidad comunitaria. Las reformas de los últimos años (Maastricht, Amsterdam, Niza), fundamentadas en la geometría variable y en la ampliación del voto por mayoría cualificada, se explican por esa necesidad actual y, sobre todo, futura de gestionar la diversidad. La casa europea no será la misma cuando la formen veintisiete, veintiocho o más miembros. No hay que caer en la nostalgia del pasado sino prepararse para el futuro.

■ África

El Congo después de Kabila

Perspectivas de paz

Mbuyi Kabunda

El genocidio de Ruanda de 1994, junto a la utilización de los campos de refugiados del este de la República Democrática del Congo (RDC), donde se atrincheraron los hutus extremistas contra el nuevo poder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) de liderazgo tutsi, llevaron a Ruanda, Uganda y Burundi a crear una rebelión congoleña (la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de la RDC, AFDL), cuya dirección confiaron a Laurent-Désiré Kabila con el fin de destruir esos campos y acabar con la dictadura de Mobutu Sese Seko.

Una vez instalado en Kinshasa el 17 de mayo de 1997, tras la huida al exilio de Mobutu, Kabila dejó de ser un "señor de la guerra" para convertirse en jefe de Estado. Pronto surgieron las discrepancias con los aliados, consecuencia del proceso de "congolización" y "katangalización" del poder por Kabila, con la consiguiente rebelión armada de agosto de 1998, apoyada por aquellos países cuya meta era repetir el proceso con el que

llevaron a Kabila hasta el gobierno. Éste fue salvado en extremo por las intervenciones de Angola, Zimbabue y Namibia.

Desde entonces, el país está dividido en distintas zonas, ocupadas por las fuerzas rebeldes (Reunión Congoleña para la Democracia, RCD-Goma, RCD-Kisangani, y el Movimiento de Liberación del Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba) apoyadas por las tropas ruandesas y ugandesas, respectivamente. El resultado fue la adopción de una economía de guerra, que impidió a Kabila dar la máxima prioridad al desarrollo y democratización del país.

El pasado 16 de enero, día que se cumplían cuarenta años de la muerte de Patrice Lumumba, Kabila fue asesinado por uno de los *kadogos* (niños soldados) que le llevaron al poder hace tres años y medio. El balance puede resumirse en la popularidad de Kabila en la zona ocupada, y su impopularidad en el territorio que controla su gobierno. En su haber, se puede mencionar la reducción de la inseguridad en las grandes ciudades y

Mbuyi Kabunda es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Lubumbashi (República Democrática de Congo) y presidente de SODEPAZ.